

|  |
| --- |
| **Simposio 4: Desafíos de la educación como derecho humano fundamental en términos de la igualdad real o estructural.**  **El derecho a la educación en las políticas federales. El rol del Consejo Federal de Educación entre 2014 y 2018** |
| Marina Aida Mariani (licmarianimarina@gmail.com)  Martín Javier Caldo (mjcaldo@yahoo.com.ar) |
| Facultad de Psicología / Universidad de Buenos Aires  Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Buenos Aires / Argentina |
|  |

**RESUMEN**

En esta presentación nos proponemos compartir los avances del trabajo de investigación que desarrollamos en el marco del Programa UBACYT, en el Proyecto dirigido por el Dr. Guillermo Ruiz en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología. En el mismo analizamos las resoluciones del Consejo Federal de Educación en el período 2014 a 2018 en tanto enunciaciones de las políticas públicas educativas federales, vinculándolas con la responsabilidad estatal de garantizar las condiciones de ejercicio del derecho a la educación de todos los habitantes de la República Argentina. Dada la organización federal del sistema educativo argentino, las relaciones entre los dos locus de poder, el centro y las jurisdicciones, son por demás complejas; sin embargo, la supremacía federal conlleva a que las resoluciones aprobadas por el Consejo Federal de Educación se impongan sobre los ordenamientos jurídicos de los estados miembros (Ruiz, 2016). De acuerdo a lo establecido en la Ley de Educación Nacional, el Consejo Federal de Educación es el *ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacional,* para asegurar la unidad y la articulación del sistema educativo. Luego de la federalización del sistema educativo, a partir de las transferencias de los servicios educativos finalizada en 1992, el nivel federal implicó, además de descentralizar y transferir, integrar esas partes dispersas (Giovine, 2012). Es decir que el rol del Consejo Federal podría entenderse como la instancia de gobierno que busca garantizar lineamientos que tiendan a un piso de igualdad entre las jurisdicciones, que se corresponde con las condiciones materiales del ejercicio del derecho a la educación.

A partir de éste marco de definiciones, el presente trabajo tiene como objetivo principal analizar las implicancias del nivel federal en el período 2014-2018 a la luz del derecho a la educación. Este trabajo de análisis de la política educativa, se centró en las Resoluciones aprobadas por el Consejo Federal de Educación por ser aquellas acordadas por el nivel nacional y el jurisdiccional y de cumplimiento obligatorio para las jurisdicciones.

La primera cuestión que analizamos será la importancia otorgada al Consejo Federal durante estos años, verificable en cierta forma en la cantidad de resoluciones emitidas a lo largo del período. Por otra parte, examinamos la participación de las provincias en las reuniones de la Asamblea del Consejo Federal como una forma de verificar los consensos logrados, los cuales podrían implicar pisos de igualdad en la aplicación de las políticas.

En segundo término, analizamos los temas de las resoluciones, es decir sobre qué líneas de política educativa se decidió trabajar y en qué medida esos temas atienden a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación.

Por último, nos centramos en los contenidos de algunas de las resoluciones que consideramos más importantes, tanto por su carácter general como por su atención a sectores sociales que se encuentran en situación de vulneración de derechos. En este punto del trabajo el análisis se orienta hacia la cercanía o distancia que existe entre lo enunciado y la concepción de la educación como derecho humano fundamental.

Algunas de las conclusiones que podrían señalarse en esta primera fase de acercamiento serían:

* Se encontró que la cantidad de resoluciones disminuyó notablemente a partir del año 2016 lo cual podría vincularse al hecho de que no existan tantos aspectos para regular considerando que la legislación nacional lleva más de diez años de aprobada. En relación con ello, se encontraron menos resoluciones sobre lineamientos u orientaciones para la implementación en las jurisdicciones de la política nacional. Sin embargo, nos preguntamos si la menor actividad del Consejo no llevaría a agrandar la brecha entre las provincias en lo que refiere a la implementación de la política nacional y los acuerdos federales.
* Con respeto al contenido de las resoluciones, hallamos que, excepto entre 2016 y 2017 (años en los que predominaron temas vinculados a la gestión política) la mayoría se centraron en el aspecto curricular, específicamente en lo que refiere a la educación técnico profesional. Con respecto al derecho a la educación de grupos vulnerables, cabe señalar que en el año 2015 una de las resoluciones refirió a la adecuación para el cumplimiento de las leyes del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la Ley de Identidad de Género, de Matrimonio Igualitario y del Nuevo Código Civil y Comercial, aludiendo así a temas vinculados con minorías. En ésta línea también podría señalarse la resolución aprobada en el año 2016 sobre el acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes con discapacidad.

En síntesis, se trata de un primer análisis del rol del Consejo Federal de Educación en los últimos cuatro años, período en el que se evidencia un cambio de gobierno, hecho que nos lleva a profundizar el análisis a partir de una posible comparación de diferencias y continuidades alrededor de las políticas federales y del rol del Consejo Federal en la definición de acuerdos y pisos mínimos para la implementación de la política nacional en las jurisdicciones.

**PALABRAS CLAVE**

Política educativa - Derecho a la educación - Gobierno federal

**Introducción**

En un gobierno en el cual deben articularse las autonomías provinciales y un estado nacional, los órganos federales se constituyen como espacios de concertación de la política cuyos acuerdos consecuentes establecen ciertos pisos para la implementación de acciones por parte de las jurisdicciones. En el caso de nuestro sistema educativo, en 1972 se creó el Consejo Federal de Educación que fue sufriendo algunas modificaciones en torno a sus funciones y a las características de sus dictámenes a lo largo del tiempo cobrando mayor centralidad a partir de la Ley de Educación Nacional. Ello se evidencia en la participación del Consejo en múltiples funciones junto con el nivel central, dando lugar a una re centralización de las decisiones, por ejemplo, en la definición curricular.

El presente trabajo se propone analizar las implicancias del Consejo Federal de Educación a través de las resoluciones emitidas durante el periodo 2014 a 2018. El recorte temporal responde al interés por analizar las resoluciones en dos períodos (2014-2015 y 2016-2018) con diferentes gestiones políticas al mando del estado federal y bajo la misma Ley Nacional de Educación.

Para el análisis de las resoluciones se las agrupó en las siguientes categorías:

* *Administrativas*, que incluye a las resoluciones que atañen al funcionamiento del Consejo y de las instituciones en aspectos organizativos burocráticos.
* *Calendario escolar*, donde agrupamos las que establecen principalmente fechas relevantes del mismo.
* *Convivencia*, en la cual se reúnen las que refieren a pautas de convivencia escolar
* *Curriculares*, contiene a las relacionadas con planes de estudio o aspectos vinculados a contenidos y/o formas de enseñanza. En este caso se discriminaron por nivel y/o modalidad.
* *Declarativas*, dentro de la cual incluimos a las declaraciones de interés educativo
* *Gestión Institucional*, en la cual ubicamos las resoluciones que se referían a este aspecto de la vida en las escuelas
* *Gestión Política*, en la cual reunimos a las que implementan políticas de carácter general como las evaluaciones.

El análisis se enfoca en la cantidad de resoluciones, su categorización y los temas de referencia así como también en la participación de las distintas provincias en las Asambleas y se propone dar cuenta de la actividad del Consejo Federal y los consensos logrados en tanto pisos federales para el desarrollo de acciones por parte de las jurisdicciones.

**El rol del Consejo Federal de Educación en el marco del gobierno federal**

Actualmente, el sistema educativo argentino comprende 24 sistemas educativos de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encuentran articulados a través de un complejo entramado normativo en el que se destacan las leyes nacionales por ser aquellas que establecen el piso federal sobre el cual cada jurisdicción debe regular en su territorio. Pero además de la legislación de base aprobada en el ámbito del Congreso Nacional, los dictámenes del Consejo Federal de Educación, en tanto órgano interjurisdiccional, también operan como marcos normativos en el nivel federal para la implementación de la política nacional en las jurisdicciones.

Esto no siempre fue así, ya que en sus orígenes el Gobierno Nacional tenía a su cargo una parte importante del sistema educativo de los actuales niveles primario y secundario de educación. Desde el origen del sistema educativo hasta mediados del siglo XX, la acción del Estado Nacional contribuyó a dotar de cierta unidad al sistema educativo. Este proceso de unificación comenzó a correr en sentido inverso cuando a partir del año 1955 se dio inicio a un proceso de transferencia de escuelas nacionales a las provincias que culminó en el año 1992 cuando por la Ley N°24049 se transfirieron a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires las últimas escuelas nacionales, aquellas pertenecientes a los niveles secundario y terciario. La transferencia de los servicios educativos a las jurisdicciones implicó una redefinición de las funciones de los niveles de gobierno del sistema educativo. Cabe señalar que la transferencia fue discutida en el ámbito del Consejo Federal y se materializó en una recomendación fundamentada en que la transferencia formaba parte de un proceso de auténtica federalización (Palanza, 2002) A nivel nacional, el Ministerio de Educación se convirtió en un “ministerio sin escuelas” y concentró sus funciones en la fijación y el cumplimiento de la política educativa, la elaboración de macroproyectos de ejecución descentralizada y la evaluación de la calidad educativa. Por su parte, la prestación del servicio educativo quedó en manos de las jurisdicciones. Frente a un sistema descentralizado y la presencia de dos grandes centros de poder, lo nacional y lo local, surge la necesidad articular estos dos niveles. Desde el último cuarto del siglo XX la conformación del Consejo Federal de Educación significó una necesaria articulación entre “lo nacional” y “lo local”. Así, lo federal surgió como un locus que debía trascender lo nacional y lo jurisdiccional, un locus que unifique y articule las partes dispersas del sistema (Giovine,2012).

Sin pretender realizar un análisis exhaustivo en torno a las modificaciones que ha sufrido el marco normativo que reguló el Consejo Federal de Educación, sí nos parece relevante dar cuenta de cómo se fue constituyendo como un órgano centralizador de las decisiones. Ya desde el momento de su creación, en 1972, la misión del Consejo Federal de Educación fue la de planificar, coordinar, asesorar y acordar en aquellos aspectos de la política educativa nacional en las que se viera comprometida la acción conjunta de la Nación y de las Provincias, cuidando de respetar las necesidades propias de cada Provincia o región. Hasta ese momento, sólo algunas escuelas primarias habían sido transferidas a las provincias, por lo que el Estado Nacional aún compartía la prestación del servicio educativo en el nivel primario, secundario y superior no universitario con las jurisdicciones. Unos pocos años más tarde, entre 1976 y 1978 y en el marco del último gobierno de facto, se transfirieron compulsivamente la totalidad de escuelas nacionales de nivel primario. En dicho contexto y habiendo finalizado el proceso de descentralización del nivel, en 1979 se creó el Consejo Federal de Cultura y Educación por medio de la Ley de facto N° 22047, cuya redacción reflejó el marco político-institucional de la época. Siguiendo el análisis de Paviglianitti (1989), en esencia se mantuvo como misión la planificación, coordinación, el asesoramiento y el acuerdo de las políticas pero se explicitó el carácter de la política educativa, orientada a “afirmar el desarrollo educativo y asegurar la vigencia de la cultura nacional, su proyección en el mundo y la consolidación de los valores éticos cristianos enraizados en la tradición del país” (Ley de facto N°22047, artículo 1). Además, se eliminó el artículo 3 que establecía que las funciones se llevarían a cabo respetando las necesidades propias de cada provincia o región; se estableció una nueva función, la de proponer las políticas y las acciones; y se enfatizó en la evaluación de los resultados logrados en la aplicación de las políticas y de las acciones propuestas.

Con la recuperación de la democracia, el interés por reglamentar la Ley de facto en el marco de la Constitución Nacional se materializó en el Decreto PEN N° 943/84 en el cual se señaló que las funciones de planificación y coordinación de la acción conjunta entre el Estado nacional y las jurisdicciones se llevarían a cabo respetando las jurisdicciones institucionales establecidas en la Constitución Nacional. Sumado a esta reglamentación, el Consejo Federal de Cultura y Educación también emitió dictámenes con el fin de adecuar su funcionamiento al nuevo orden institucional, enfatizando en su carácter de discusión, reflexión y acuerdo y en la defensa y el respeto de los principios federales (Paviglianitti, 1988). Sin embargo, una de las mayores preocupaciones en torno a su funcionamiento no se vio resuelta a lo largo de este período: la de cómo dotarlo de capacidad operativa en lo que refiere al cumplimiento de las acciones planificadas y acordadas en su ámbito. Podría afirmarse que, uno de los cambios fundamentales en éste aspecto fue el introducido por la Ley de Educación Nacional 26206 en su artículo 118 que dispone que “las Resoluciones del Consejo Federal de Educación serán de cumplimiento obligatorio, cuando la Asamblea así lo disponga, de acuerdo con la Reglamentación que la misma establezca para estos casos”. Si bien el Reglamento de la creación del Consejo Federal de Educación ya establecía dos tipos de dictámenes, recomendaciones y resoluciones, históricamente tuvieron el carácter de recomendaciones (Senén González, 2015). Otro dato a considerar señalado por Senén González es que de las seis leyes aprobadas en el período 2003 a 2006, cinco remiten a roles y funciones del Consejo Federal de Educación, dando cuenta de la revalorización de su rol (Senén González, 2015). Sin embargo, de acuerdo al planteo de Ruiz (2016) “la ley no especifica en qué oportunidades o circunstancias las resoluciones del Consejo Federal se volverán obligatorias para las jurisdicciones” (p 65). Tal especificación se resolvió en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo aprobado por Resolución N°1 en el año 2007 en el que se establece que la Asamblea o su Secretaría General serán las que propongan qué cuestiones constituirán resoluciones y cuáles recomendaciones. (Ruiz, 2016).

En cuanto a la explicitación en torno a la obligatoriedad por parte de las jurisdicciones del cumplimiento de las Resoluciones podría responder a la necesidad de dotar de unidad al sistema educativo tras la profunda desigualdad que se generó con la implementación de la Ley Federal de Educación, a pesar de que en la mencionada ley la misión del consejo fuera redefinida en términos de “unificar criterios entre las jurisdicciones, cooperar en la consolidación de la identidad nacional y en que a todos los habitantes del país se les garantice el derecho constitucional de enseñar y aprender en forma igualitaria y equitativa” (Ley Federal de Educación, 1993, artículo 55). Los principales acuerdos logrados en este periodo en el ámbito federal refirieron a la definición curricular, a las características, finalidades y funciones de los nuevos niveles de la estructura académica y sobre la gradualidad en la implementación de la Ley (Palanza, 2002). La labor del Consejo se centró en la reglamentación de la Ley Federal de Educación mediante la aprobación de numerosas resoluciones normativas al mismo tiempo que la negociación de los problemas jurisdiccionales se recortó razón por la que muchos acuerdos no fueron oportunamente cumplidos por las provincias (Scioscioli, 2015).

En síntesis, el gobierno federal de nuestro sistema educativo supone una red de relaciones entre el Estado federal y los Estados provinciales que dan lugar a un entramado de normas y acciones con el fin de dotar de unidad al sistema y de articular los diferentes sistemas educativos coexistentes. En este marco de relaciones, a partir de la Ley de Educación Nacional diversos autores (Senén González, 2015; Scioscioli, 2015; Cao, Rey y Serafinoff, 2016) coinciden en que se produjo una “re jerarquización” del Consejo Federal de Educación al formar parte de definiciones de temas centrales y al emitir resoluciones vinculantes para las jurisdicciones.

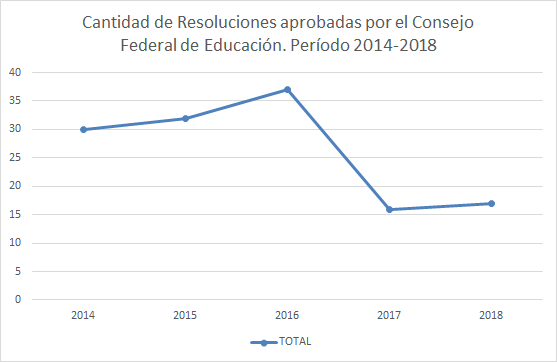
**La actividad del Consejo Federal de Educación a la luz de las resoluciones emitidas en el período 2014 - 2018**

La primera cuestión analizada es la importancia otorgada al Consejo Federal durante estos años, verificable en cierta forma en la cantidad de resoluciones emitidas a lo largo del período. Por otra parte, examinamos la participación de las provincias en las reuniones de la Asamblea del Consejo Federal como una forma de verificar los consensos logrados, los cuales podrían implicar pisos de igualdad en la aplicación de las políticas.

Si observamos la cantidad de resoluciones emitidas por el Consejo durante el período estudiado (ver Gráfico N°1), se vislumbra que el número es similar a lo largo de los primeros tres años (30, 32 y 38 resoluciones en los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente), mientras que en los últimos dos años bajaron a la mitad (16 resoluciones en 2017 y 17 en 2018), sumando un total de 133 resoluciones en los cinco años estudiados.

Al analizar el tipo de resoluciones a lo largo de todo el período, observamos que las de gestión política fueron las más numerosas (44 sobre un total de 133), notándose un aumento de las mismas en comparación con el resto hacia el final de una gestión (2015) y en el inicio de la gestión siguiente (2016-2017). La mayor cantidad de resoluciones referidas a la gestión política se dio en el año 2016 (18 sobre un total de 41). En segundo lugar, podemos ubicar a las resoluciones vinculadas con el plano curricular, las cuales fueron 38 del total. Excepto en 2016 y 2017, años en los que predominaron resoluciones vinculadas a la gestión política, en el resto del período la mayoría de las resoluciones se refirieron al aspecto curricular, dentro del cual predominó la educación técnico profesional (la educación técnica de nivel secundario y la formación profesional). Incluso en el año 2015, coincidente con la finalización de una gestión, si bien aumentaron las resoluciones referidas a la gestión política, la mayoría refirieron al aspecto curricular, siendo el año en el que se dio la mayor cantidad de resoluciones al respecto.

Gráfico 1: Cantidad de Resoluciones aprobadas por el Consejo Federal de Educación. Período 2014-2018.



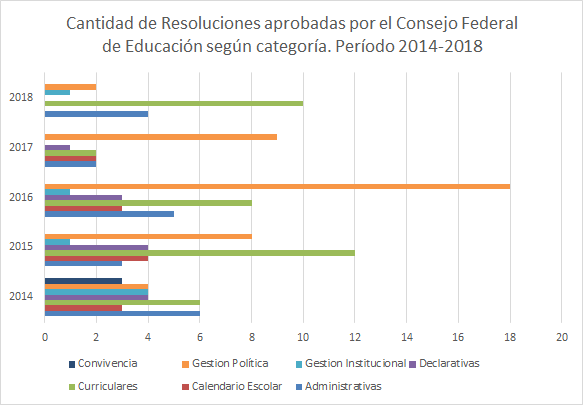
Fuente: elaboración propia (2019).

Si nos detenemos en el tipo de resoluciones por año y por gestión (ver Gráfico N°2), observamos que en el año 2014 la cantidad de resoluciones por categoría fue similar, mientras que en el resto del período se destacan en número las resoluciones vinculadas a la gestión política y la política curricular. Una de las cuestiones ampliamente regulada en el año 2014 y que no fue retomada en el resto del período es la convivencia escolar. Se aprobaron tres resoluciones al respecto: la Resolución N° 217 por la que se aprobó el documento “Guía federal de orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar”, la Resolución N° 226 que promovió la aplicación de la Ley Nacional N° 26892 “de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas” promulgada en el año 2013 y la Resolución N° 239 por la que se aprobaron las “Pautas y Criterios Federales para la elaboración de Acuerdos de Convivencia para el Nivel Inicial y Primario” y las “Pautas federales para el acompañamiento y la intervención de los Equipos de Apoyo y Orientación Escolar”. Además, se destaca una Resolución vinculada a la emisión de títulos duplicados por cambios de identidad, entre otros motivos por el cambio de identidad de género. En el año 2015, de las 32 resoluciones aprobadas, 12 refirieron al plano curricular y 8 a la gestión política, manteniendo el resto de las categorías un número bajo y similar entre sí. Se destaca la Resolución N° 261 sobre la adecuación para cumplimentar con las leyes y reglamentaciones vigentes de educación Sexual Integral, de Matrimonio Igualitario, de Identidad de Género y del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. También podemos destacar la Resolución N° 269 sobre la Red Nacional de Educación y Memoria. Se destacan las mencionadas resoluciones por vincularse con temas derivados de la Ley de Educación Nacional, tanto las que refieren a la convivencia y la participación democrática en las instituciones educativas así como los temas referidos en el artículo 92 que forman parte de los contenidos curriculares de todas las jurisdicciones.

El año 2016, coincidente con el inicio de la nueva gestión de gobierno, se destacó por la cantidad de resoluciones sobre gestión política: se aprobaron 18 sobre un total de 38 resoluciones, seguidas por las referidas a la política curricular. En este marco político, las resoluciones se centraron en la designación de miembros y en la aprobación de las políticas federales de la nueva gestión entre las que se destacan las resoluciones referidas al Sistema de Evaluación Nacional de Calidad y Equidad Educativa, al Plan Nacional de Acción 2016-2021 “Argentina Enseña y Aprende” y a la educación especial.

Por último, como se señaló anteriormente, los años 2017 y 2018 fueron los de menor cantidad de resoluciones. En el 2017, de las 16 aprobadas, 9 refirieron a la gestión política, entre las que se destacan las referidas a las modificaciones del Programa de Formación Permanente Nuestra Escuela, la extensión de la jornada escolar y la evaluación de la calidad educativa. En al año 2018 el área con mayor cantidad de resoluciones fue el área curricular con un total de 10 sobre 17, la mayoría referidas a la educación técnica y profesional. Cabe señalar cierta centralidad de los lineamientos vinculados a la evaluación, en especial alrededor del operativo nacional de evaluación, renombrado como Aprender, la constitución de la evaluación de la Formación Docente, la implementación de la distinción Maestro Ilustre y la inclusión de indicadores que señalan progresos de aprendizaje.

Gráfico 2: Cantidad de Resoluciones aprobadas en el Consejo Federal de Educación según categoría. Período 2014-2018.



Fuente: Elaboración propia (2019).

**Posibles análisis en las comparaciones de las políticas implementadas**

En primer lugar, retomamos la comprobación de las diferencias halladas entre la actividad del Consejo durante los años 2014 y 2015 y durante el período 2016 a 2018 en torno a la cantidad de resoluciones aprobadas. Esta disminución de las cantidades de resoluciones podría analizarse desde dos perspectivas diferentes. Por un lado podría indicarse que la cantidad de años transcurridos desde la sanción de la Ley de Educación Nacional señala un tiempo político en el cual no resultan necesarias tantas resoluciones porque la implementación no es de tanta intensidad como en los primeros tiempos. De esta manera, podría explicarse que la cantidad menor de Resoluciones se justifica porque no son tantas las cuestiones sobre las cuales buscar acuerdos. Desde una postura opuesta, esta disminución cuantitativa que se observa podría deberse a un corrimiento del estado nacional en su carácter de impulsor del Consejo como mecanismo de dotar de cierta unidad al sistema educativo, lo cual redundaría en una mejor garantía del derecho humano fundamental de la educación.

Una cuestión que podría agregarse a la segunda interpretación del análisis está dada porque en las últimas resoluciones analizadas no figura el resultado de la votación como debería ocurrir, de acuerdo a lo que señala la Resolución 01/07. Las resoluciones en sus considerandos deben señalar votos afirmativos, negativos, abstenciones y ausencias, lo que se verifica en todas las resoluciones estudiadas, salvo en las primeras cuatro y últimas cuatro del año 2018. Nos interesa destacar que entre las últimas se encuentran la vinculada al Plan Nacional de Evaluación Educativa y la creación de la Creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Formación Docente (en adelante la CNEAC), es decir que tratan temas de importancia. La no explicitación de la votación podría leerse como una posible manera de ocultar diferencias expresadas en votos negativos o abstenciones.

En segundo lugar, nos interesa señalar los temas de la política educativa en los que se decidió trabajar y en qué medida esos temas atienden a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación. En este punto, en primer lugar observamos como diferencia la mayor variedad de temas sobre los que resolvió el Consejo durante los años 2014 y 2015 vinculando el derecho a la educación con la regulación de otros derechos sobre minorías reconocidos por la legislación de la época, como la ley de identidad de género, la de educación sexual integral y la ley sobre matrimonio igualitario. Se destacan también durante este período varias resoluciones vinculadas a la educación técnico profesional en lo que respecta a la incorporación de instituciones al Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional, el desarrollo del Programa de Capacitación Laboral de Alcance Nacional para la educación secundaria orientada. Otra de las líneas reguladas fue la de la formación docente en lo que refiere específicamente al reconocimiento de los títulos y las certificaciones por parte de las jurisdicciones del Programa Nuestra Escuela.

El año 2016 se caracterizó por resoluciones de aprobación de programas federales, la mayoría sobre educación técnico profesional pero entre los que se destacan los referidos a la evaluación de la calidad educativa, el Plan Nacional Argentina Enseña y Aprende, el Plan Nacional de Formación Docente. Como señalamos anteriormente, del 2016 al 2018 se observa una centralidad de las políticas enunciadas en las resoluciones alrededor de la evaluación. El renombrado operativo de evaluación Aprender en su resolución inicial no señala cómo se relaciona la evaluación con una educación inclusiva, a pesar de que la enuncia, y la mayor parte del anexo está destinada a cuestiones operativas de las características de las pruebas y de cómo lograr un incremento de las respuestas al operativo. Las posteriores resoluciones vinculadas al operativo solamente introducen novedades en las cuestiones organizativas. Esta centralidad en la evaluación puede verificarse en la constitución del Marco de Organización de los Aprendizajes de la Resolución Nº 330/17 y en la explicitación de los Indicadores de Progresión de los Aprendizajes Prioritarios de Matemática de la Resolución Nº 342/78, que se corresponden con los lineamientos de las pruebas estandarizadas internacionales. Esta centralidad en las evaluaciones no darían cuenta de una preocupación por generar políticas que garanticen el pleno ejercicio del derecho a la educación, especialmente en un país en el cual todavía no se había efectivizado la obligatoriedad de la escuela secundaria para todos los habitantes. Es decir, consideramos que primero podrían haberse propuesto políticas de inclusión de quienes todavía no habían ingresado o finalizado sus estudios de nivel secundario, para luego profundizar las cuestiones evaluativas.

En contraposición, podría señalarse en este segundo período analizado la atención a las personas con discapacidad en la Resolución Nº 311/16, sí implicaría una atención al ejercicio pleno del derecho a la educación ya que daría cuenta de garantizar o mejorar el acceso de estas minorías.

Estos análisis o conclusiones preliminares serán abordados con mayor profundidad en la segunda parte del trabajo de investigación que venimos realizando.

**BIBLIOGRAFÍA**

Cao, H., Rey, M. y Serafinoff, V. (2016). Transformaciones en el modelo de gestión federal: una reflexión de los desafíos del federalismo cooperativo a partir de la experiencia en el sector educativo argentino. *DAAPGE, 27*, pp. 67-99.

Giovine, R. (2012). *El arte de gobernar el sistema educativo. Discursos de Estado y redes de integración socioeducativas*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

Novik de Senén González, S. (2001). *Argentina: centro y periferias en la reforma educativa: macroproyectos y micropolítica (1993-1999)*. Buenos Aires.

Novik de Senén González, S. (2015). *Uno para todos ¿todos para uno? Un escenario federal para la política educativa y sus transformaciones*. Buenos Aires.

Palanza, V. (2002). Espacios de consenso alternativos: los consejos federales de la política social en Argentina.

Paviglianit, N. (1988). *Diagnóstico de la Administración Central de la Educación.* Buenos Aires: Ministerio de Educación y Justicia. Dirección Nacional de Información, Difusión, Estadística y Tecnología educativa.

Ruiz, G. coord. (2016). *La educación secundaria obligatoria en el marco de las reformas educativas nacionales: regulaciones federales y políticas jurisdiccionales*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Eudeba.

Scioscioli, S. (2015). *La educación básica como derecho fundamental: implicancias y alcances en el contexto de un estado federal.* Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Eudeba.

Normativa consultada:

Ley N° 26206. Ley de Educación Nacional.Boletín Oficial de la República Argentina. Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 28 de diciembre de 2006.

Ley N° 24195. Ley Federal de Educación. Boletín Oficial de la República Argentina. Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 05 de mayo de 1993.

Ley N° 24049. Transferencia a las provincias y a la municipalidad de Buenos Aires de servicios educativos. Boletín Oficial de la República Argentina. Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 07 de enero de 1992.

Ministerio de Cultura y Educación (1972). Ley N° 19682 y Reglamento. Buenos Aires. Centro Nacional de Documentación e Información Educativa.

Resoluciones del Consejo Federal de Educación (2014-2018).